**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
RAMA JUDICIAL**

**JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CARTAGENA
RAD. 13001-31-10-004-2022-00411-00**

Cartagena de Indias, dos (2) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Procede el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Cartagena a pronunciarse respecto de la acción de tutela promovida por CARLOS H. MESTRE DÍAZ contra NUEVA EPS, vinculándose oficiosamente al COLPENSIONES, IPS CLÍNICA GENERAL DE CARIBE, FARMACIA CAFAM, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, LABORATORIO PROCAPS y FAMISANAR EPS.

ANTECEDENTES

1. CARLOS H. MESTRE DÍAZ, formula acción de tutela con el propósito de que se le amparen su derecho fundamental al debido proceso, salud y a la vida, presuntamente conculcado por la entidad accionada.

Como sustento de la acción, presentan los hechos que a continuación se resumen:

- Afirma que es pensionado y cuanta con 78 años de edad, y que se encuentra afiliado al régimen contributivo adscrito a la NUEVA EPS.

- Indica que el médico tratante, desde el día 27 de mayo del ogaño, le ordeno medicamento denominado AMLODIPINA + VALSARTAN 5/160 MG (CAPSULA) – (H), vista que desde hace tiempo fue declarado Hipertenso.

- Asegura que al acercarse para reclamar el medicamento prescrito por el medico tratante, le informaron que se encontraba agotado, viéndose afectado su derecho a la salud

2. Surtidas las respectivas notificaciones de la admisión se recepcionaron los siguientes informes:

2.1. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM: manifestó que al realizar la validación en el sistema, se confirma efectivamente el medicamento formulado AMLODIPINO - VALSARTAN 5-160 MG CAP ha presentado “backorder” es decir, no está disponible en el laboratorio, situación que es ajena a sus responsabilidades.

2.2. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES. COLPENSIONES: informaron que lo pretendido por el accionante, es la entrega de medicamentos, circunstancia que no es de su competencia, razón por la cual, se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.3. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD: solicitan ser desvinculados del trámite de la acción de tutela, en la medida la violación de los derechos que se alegan como conculcados, no devienen de una acción u omisión atribuible a la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.4 EPS FAMISANAR SAS: indicaron que una vez, fueron notificados de la acción de tutela, se percataron que el actor, no está afiliado a la EPS FAMISAR, razón por la cual, la presunta violación de los derechos no deviene de su actuar, configurándose la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.5. PROCAPS S.A: aducen que el no suministro del medicamento solicitado por el accionante, no corresponde a razones

imputables a Procaps S.A., puesto que, ello obedece al desabastecimiento de las materias primas y material de empaque necesarios para la fabricación de este.

2.6. NUEVA EPS S.A: arguyen que efectivamente el accionante, se encuentra adscrito a su EPS, con una asignación o pensión de un millón de pesos.

Seguidamente afirman que se encuentran validando las ordenes médicas allegadas y una vez se cuente con el concepto por parte del área de salud se estaría informando al despacho.

CONSIDERACIONES

1. La Constitución Política de Colombia no solo consagró en forma expresa un determinado número de derechos considerados como fundamentales ya antes reconocidos por organizaciones supranacionales, sino que además instituyó un mecanismo especial para brindarle protección jurídica a tales derechos cuando resulten violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos determinados en la ley.

Dispone el artículo 86 de la Constitución Política:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”

La acción de tutela, aunque esté prevista para la protección de los derechos Constitucionales Fundamentales, expresamente señalados en nuestra Carta Magna, no es un mecanismo excluyente

de la protección consecuencial e indirecta de los restantes derechos e intereses jurídicos, siempre que en su ejercicio se reclame y se determine la violación o la amenaza de violación directa y eficiente de los derechos Constitucionales Fundamentales que resulten afectados por conexidad con otros derechos primarios como la vida, la integridad personal, o la dignidad humana.

El derecho a la **salud**, el invocado por la actora, ha sido definido jurisprudencialmente como una prerrogativa fundamental independiente y un servicio público de carácter obligatorio, que debe ser proporcionado a todos los habitantes del territorio nacional, sin excepción, siendo el Estado el garante de que dicha prestación sea oportuna, eficiente y de calidad, amparada bajo los principios de continuidad, integralidad e igualdad¹.

Por otro lado, sobre el derecho a la salud de las personas de la tercera edad, el máximo órgano Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha dispuesto que al ser un grupo vulnerable y desprotegido, gozan de una protección especial². En consecuencia, es innegable la protección reforzada que debe brindar el Estado a los adultos mayores y a los menores de edad, que como población en circunstancias de debilidad manifiesta merecen todas las garantías constitucionales; puesto que en ellos, el derecho a la salud reviste una mayor importancia, por la misma situación de indefensión en las que se encuentran.³

Descendiendo al caso que nos ocupa, se encuentra probado que el señor CARLOS H. MESTRE DÍAZ, es una persona de la tercera edad, padece de hipertensión, que además se encuentra adscrito a la EPS NUEVA EPS, y que el médico tratante le ordenó el medicamento

¹ Sentencia T-121 de 2015.

² *“En consecuencia, es innegable la protección reforzada que debe brindar el Estado a los adultos mayores y a los menores de edad, que como población en circunstancias de debilidad manifiesta merecen todas las garantías constitucionales; puesto que en ellos, el derecho a la salud reviste una mayor importancia, por la misma situación de indefensión en las que se encuentran”* – Sentencia T- 117 de 2019.

³ sentencia T-014 de 2017, M.P. Gabriel Mendoza Martelo.

denominado AMLODIPINA + VALSARTAN 5/160 MG (CAPSULA) una diaria.

Siendo así las cosas, se determinará si efectivamente bajo estas circunstancias, se presentó una violación al derecho fundamental a la salud del señor CARLOS H. MESTRE DÍAZ por parte de la accionada.

2. Sea oportuno indicar que en tratándose de temas de salud, para la procedencia del amparo, es pertinente contar con el concepto médico que se encuentra a cargo de tratar la enfermedad que aqueja al accionante.

Para el caso en particular, tenemos que el médico tratante, de la especialidad Internista de acuerdo a la solicitud medica de fecha 27 de mayo de 2022, le prescribió el medicamento denominado AMLODIPINA + VALSARTAN 5/160 MG -(H) cantidad 30 y una dosificación 1 diaria, situación que no fue desvirtuada por la accionada, razón por la cual, no puede haber circunstancias administrativas que impidan el suministro del tratamiento o servicio requerido.

La Corte Constitucional en sentencia T-475 de 2010, ha indicado:

“El concepto de servicio requerido con necesidad, en principio, es el que defina el médico tratante; la jurisprudencia constitucional ha establecido que su opinión prevalece sobre la de los funcionarios administrativos de la EPS, e incluso sobre la del Comité Técnico Científico porque su profesión médica y el conocimiento específico del paciente, lo inviste de la idoneidad y competencia que se requiere para determinar la necesidad y urgencia del servicio o medicamento”

Quiere ello decir, que cuando se requiera un servicio, el cual ha sido prescrito por el médico tratante, para mantener la salud, dicho servicio debe ser prestado de manera oportuna, sin dilación alguna, que ponga en riesgo o deterioro la salud del paciente, puesto que un

actuar en sentido contrario desconoce el derecho de las personas a acceder en condiciones dignas a los servicios de salud.

Al respecto la sentencia T234 de 2013 anoto:

“las Entidades Promotoras de Salud, al tener encomendada la administración de la prestación de estos servicios, que a su vez son suministrados por las IPS, no pueden someter a los pacientes a demoras excesivas en la prestación de los mismos o a una paralización del proceso clínico por razones puramente administrativas o burocráticas, como el cambio de un contrato médico. En efecto, cuando existe una interrupción o dilación arbitraria, esto es, que no está justificada por motivos estrictamente médicos las reglas de continuidad y oportunidad se incumplen y en consecuencia, al prolongarse el estado de anormalidad del enfermo y sus padecimientos, se desconoce el derecho que tiene toda persona de acceder en condiciones dignas a los servicios de salud”

Bajo el panorama descrito, no es de recibo para este despacho el argumento esbozado por parte de los vinculados a la presente acción de tutela, cuando afirman que dicho medicamento, AMLODIPINO - VALSARTAN 5-160 MG CAP ha presentado “backorder”, es decir, no está disponible en el laboratorio, y por ello, no ha podido ser entregado, situación que se presenta desde el mes de mayo del año que avanza, cuando fue ordenado por el médico y tratante, situación que a estas alturas ya debió estar superada en la medida que han transcurrido cerca de tres meses, sin que se haya solucionado, poniendo en peligro la salud y por ende la vida del accionante.

Por otra parte, si bien no ha sido negado la entrega del medicamento, lo cierto es que a la fecha, no hay evidencia de que efectivamente dicho medicamento haya sido entregado, o sustituido por algún otro por el médico tratante

De modo que, con el actuar de la Nueva EPS, pone en riesgo de manera injustificada la salud y vida de Carlos H Mestre, puesto que ha pasado tiempo en exceso, desde la prescripción médica solicitado en la acción constitucional que nos ocupa.

Por lo tanto, y frente a la omisión tendiente a la realización de la entrega oportuna del medicamento que requiere el accionante, muy a pesar de contar con la orden médica, y siendo el único responsable de procurar la prestación de servicio ordenado la NEUVA EPS, se amparara el derecho fundamental de salud al señor CARLOS H. MESTRE DÍAZ, por lo que se ordenará la entrega del medicamento AMLODIPINO - VALSARTAN 5-160 MG (CAPSULA) – (H), durante el tiempo y en la cantidad indicada por su médico tratante

DECISIÓN

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Cartagena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al señor CARLOS H. MESTRE DÍAZ, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a la **NEUVA EPS**, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente proveído haga la entrega del medicamento AMLODIPINO - VALSARTAN 5-160 MG (CAPSULA) – (H), durante el tiempo y en la cantidad indicada por su médico tratante, quedando en todo caso la promotora en la facultad de repetir contra el ADRES en los sobrecostos que no se encuentre cubierto por el P.O.S.

TERCERO: DEVINCULAR del presente trámite a las vinculadas.

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes involucradas en este asunto en la forma más expedita y eficaz.

QUINTO: ENVIAR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, con observancia del término previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

LUZ ESTELA PAYARES RIVERA
Jueza

Firmado Por:
Luz Estela Payares Rivera
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 04 Oral
Cartagena - Bolivar

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5a922ed9245753848c701dca60fabb5357b3157e6077dd9d7ca8bf963b7b0eda**

Documento generado en 02/09/2022 11:09:32 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>